

La Junta avanza en el desmantelamiento de la cooperación y traspasa a su personal

El director general de Servicios Sociales e Infancia ratifica que la región no acogerá a más menores migrantes no acompañados

A. B. HERNÁNDEZ
Plasencia

La Junta avanza en el desmantelamiento de la cooperación internacional. El director general de Servicios Sociales, Infancia y Familia, Eliseo Fernández, adelantó ayer en la Asamblea que ya ha comenzado el traspaso del personal destinado a estas funciones al departamento que él dirige dentro de la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación.

Una medida anunciada por el vicepresidente, Óscar Fernández, que sigue al recorte notable de los recursos dedicados a cooperación. En concreto, una rebaja de casi 11 millones de euros a 2,7 que dejan a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid) prácticamente sin actividad.

Eliseo Fernández explicó que, al igual que primero los fondos, ahora ya también se está traspasando al personal de cooperación hacia los servicios sociales para potenciarlos. «Esperamos que esto mejore los servicios», dijo el director general en la comparecencia que protagonizó en la Asamblea para responder a diferentes cuestiones planteadas por PSOE y Unidas por Extremadura en asuntos relacionados con la juventud, el sistema de protección de menores y los servicios sociales.

Más allá del traspaso del personal de cooperación y el adelanto de que la Consejería de Desregulación hará cambios normativos en estos asuntos, que no ha concretado, Eliseo Fernández respondió a la oposición repitiendo el nuevo marco ideológico que marca la política de su departamento y, por tanto, de la Junta: prioridad nacional.

En materia de juventud, a preguntas del diputado socialista Aitor Vaquerizo, quien le instó a decir qué medidas concretas baraja la



El director general de Servicios Sociales, Eliseo Fernández, en su comparecencia en la Asamblea. AEX

Junta para enfrentar el hecho de que el número de jóvenes extremeños emancipados haya caído a la mitad en cinco años, el director general aseguró que «se va a priorizar a los jóvenes de aquí, no a los de fuera, frente a lo que llevan ustedes años haciendo, para que sean los primeros a la hora de acceder a ayudas y a viviendas sociales», tras recordar las medidas recogidas en el pacto de gobierno con el PP, como la construcción de viviendas y los incentivos fiscales, entre otras.

Menores no acompañados

Una respuesta similar, marco ideológico sin medidas concretas, es la que dio tanto a la diputada socialista Soraya Vega como al diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos. La primera quería saber cómo se va a aplicar la desregulación en las políticas de infancia y el segundo, cuáles son las prioridades de la consejería para el sistema público de servicios sociales.

Soraya Vega criticó que la Junta

«esté generando un sistema que establece menores de primera y de segunda en el acceso a la protección pública», defendió que Extremadura puede acoger a 364 menores como dice el Gobierno «con los presupuestos más altos de la historia», e instó al director general a cumplir con su obligación y acudir a la sectorial de infancia, en lugar de plantar al Gobierno, «porque es ahí donde tienen que plantear sus propuestas. Esto es cultura democrática».

Eliseo Fernández defendió que la desregulación «no significa desproteger ni reducir garantías, sino todo lo contrario, porque el exceso de burocracia desprotege» y el objetivo, ahon-

Los empleados de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo pasan a reforzar Servicios Sociales

que la llegada del PP a los gobiernos regional y local ralentice los proyectos industriales y manifestar que se están poniendo en peligro inversiones de muchos millones y muchos puestos de trabajo.

Defendió Ramos la labor Guillermo Fernández Vara al frente de la Junta para abrir oportunidades «con las que nunca soñó la región». Se refirió, precisamente a la creación de zonas industriales como ExpacioNavalmoral y a su trabajo para traer empresas como la gigafactoría de baterías. «Las noticias que escuchamos últimamente nos preocupan muchísimo. Porque

dó, es simplificar los trámites que sea posible para dar una respuesta ágil ante cualquier necesidad «porque el tiempo es importante cuando hablamos de menores».

Pero el director general insistió en su oposición al reparto de más menores migrantes no acompañados. «Ni asistimos a la reunión ni vamos a asistir porque no vamos a ser cómplices de este Gobierno», defendió, tras incidir en que «el sistema de protección está al límite y esto me quita el sueño, porque vamos a tener problemas muy serios si esto sigue así».

En respuesta a José Antonio González, quien le recriminó que «en una región con un millón de habitantes no podamos acoger a 364 menores» y criticado que «gobiernen con prejuicios», Eliseo Fernández ratificó su postura. «Los menores migrantes son un problema muy serio y con una solución de buenismo, se empeora. Prefiero que me llamen como quieran pero hay que darle una solución, pararlo de golpe, sé que es duro y no popular, pero es necesario».

El Gobierno tomará en dos meses la decisión sobre el futuro de Almaraz

CRISTINA CÁNDIDO
Madrid

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) decidió el lunes posponer el análisis y la votación del informe que permitirá a la central nuclear de Almaraz (Cáceres) extender su actividad hasta el año 2030. Esta propuesta supondría modificar el calendario vigente, que contempla el cierre progresivo de sus dos reactores en 2027 y 2028.

Según pudo confirmar HOY, el asunto estaba incluido en el orden del día del pleno celebrado, aunque finalmente su debate fue aplazado tras la solicitud de uno de los consejeros. El pleno fue adelantado esta semana debido a compromisos de agenda del presidente del CSN, Juan Carlos Lentijo. Pese al retraso, la previsión es que el informe sea analizado en las próximas semanas.

El organismo debe pronunciarse sobre las condiciones de seguridad que debería cumplir la planta para prolongar su funcionamiento hasta junio de 2030. La decisión podría retrasarse hasta las últimas reuniones previstas para este mes. Los consejeros tienen la posibilidad de solicitar hasta dos aplazamientos, aunque el objetivo es resolverlo antes de la pausa estival de agosto.

Próximos pasos

Si el informe es favorable, la decisión pasará a depender exclusivamente del Gobierno. El Ejecutivo contará con un plazo aproximado de dos meses para pronunciarse. En caso de no adoptar una resolución dentro de ese periodo, se aplicaría el silencio administrativo negativo, por lo que la petición de prórroga quedaría desestimada.

Al mismo tiempo, la legislación establece que las empresas propietarias deben iniciar los trámites para el cese definitivo de un reactor al menos un año antes de la fecha fijada para su clausura. En el caso de la unidad I de Almaraz, ese procedimiento tendría que comenzar antes del 1 de noviembre.

El PSOE defiende limitar la superficie y la potencia que ocupen los centros de datos

MIGUEL ÁNGEL MARCOS
Navalmoral de la Mata

El PSOE de Extremadura cree que hay que establecer unas condiciones para que los centros de datos no ocupen la mayor parte del suelo destinado a desarrollo industrial ni dis-

pongan de toda la potencia eléctrica disponible cuando el número de empleos que generan es menor que otras industrias con muchas menos necesidades.

Así lo manifestó ayer el diputado socialista César Ramos en Navalmoral de la Mata. Lo hizo tras lamentar

esos espacios que no existían hace tiempo, y por eso no podían venir proyectos, la Junta los está cediendo para grandes centros de datos, que pueden ocupar ese espacio que nos costó mucho desarrollar y gran parte de la potencia eléctrica disponible, cuando los puestos de trabajo que generan son bajos en proporción al terreno y a la potencia que necesitan».

La preocupación nace, para Ramos, de la decisión del Gobierno de María Guardiola de convertir a la región en el «espacio ideal» para los centros de datos de España, como demuestran los proyectos previstos

en Navalmoral de la Mata y Valdecaballeros.

Mencionó el diputado socialista la empresa Ondupack, que ocupa seis hectáreas de ExpacioNavalmoral y utiliza un máximo de 8 megavatios (MW) de potencia de 8 MW con los que genera 50 puestos de trabajo y tiene la previsión de crecer hasta los 180. Comparó esta instalación con un centro de datos que ocupará diez veces más espacio y necesitará «36 veces más» potencia para crear 250 empleos. Eso sí, insistió para concluir que el PSOE no se opone a los centros de datos.